En defensa de la educación pública - Levante Castelló - 11/03/2017

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

FORO CASTELLÓ XXI
Jorge Ribes
Portavoz del Consell de l'Estudiantat UJI

El pasado jueves 9 de marzo tuvo lugar una nueva huelga general educativa. A diferencia de otras ocasiones, en este caso la huelga general sí ha conseguido abarcar un gran número de agentes educativos, ya que ha sido convocada tanto por estudiantes, como por profesores, AMPAS y sindicatos. Además, la huelga educativa estaba convocada a todos los niveles, desde nivel infantil hasta nivel universitario.

Al margen de la causa subyacente –la defensa acérrima de una educación pública y de calidad–, existen numerosos motivos por los que se ha convocado esta huelga general educativa. Haciendo una breve contextualización antes de ver algunas de esta razones, la LOMCE (también conocida como 'Ley **Wert**') es la nueva norma educativa que lanzó el Partido Popular en 2013 y que actualizaba la LOE (Ley Orgánica de Educación, de 2006). Esta ley suscitó polémica desde el minuto cero, ya que fue aprobada aplicando el rodillo de la mayoría absoluta: contó únicamente con los votos a favor del Partido Popular. Posteriormente, en abril de 2016, el PSOE realizó una proposición de ley para paralizar la LOMCE contando con los votos a favor de todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados a excepción de los del Partido Popular y Foro Asturias. Por último, a principios de 2017 el PP lleva ante el Tribunal Constitucional un recurso para evitar la paralización de la LOMCE.

Por tanto, la situación ante la que nos encontramos ahora mismo es un Partido Popular obcecado con sacar adelante una ley retrógrada que no cuenta con ningún apoyo ni dentro ni fuera del Parlamento, una sociedad que ve como día a día se va deteriorando cada vez más la educación pública y una comunidad educativa a la que le imponen normas carentes de consenso evidenciando que cada vez se politiza más un campo en el que siempre debería primar el interés común de las y los estudiantes. Si a esto le añadimos otros ingredientes como la lucha de la comunidad universitaria contra el 3+2 (carrera corta de tres años y dos años de master) o los crueles recortes en becas que obligan a que cientos de estudiantes tengan que abandonar sus estudios, el cóctel resultante no podía ser otro que una huelga general educativa.

No obstante, vivimos un momento francamente complicado. El rechazo social –no sin razón– existente hacia la clase política, fomenta que día a día el activismo en cualquiera de sus formas se haya ido desgastando hasta llegar a un punto en el que se convierte casi en una hazaña implicar a la gente en una causa determinada. No ayuda nada la aparente necesidad capital que tienen la mayor parte de grupos políticos o sindicatos de apropiarse de cualquier causa con la consiguiente e inevitable consecuencia de fragmentar aún más la ya dividida sociedad activa.

Todos aquellos que de una forma u otra participamos en movimientos activamente, sabemos lo difícil que es movilizar a la gente, especialmente cuando se trata de gente joven. En lo que respecta al activismo, tanto político como apolítico, vive una época extremadamente mala, impregnada siempre de pasividad e indiferencia, lo cual se acaba traduciendo en falta de responsabilidad social. Centrándonos en el ámbito educativo, se corre muy a menudo el riesgo de pecar en considerar la educación pública como algo inamovible, algo que hemos heredado y que simplemente está y estará ahí. Hablaba antes de falta de responsabilidad precisamente porque es nuestra responsabilidad eludir la indiferencia, nuestro deber luchar porque futuras generaciones puedan disfrutar de uno de los pilares del estado del bienestar como es la educación pública y de calidad.

He resaltado negativamente el empecinamiento del Partido Popular con la LOMCE precisamente por la importancia que creo que tiene alcanzar un consenso en una materia como la educación, donde es necesaria cierta estabilidad que permita que los alumnos no tengan que estar continuamente pendientes de si cambian o no las reglas del juego y el consecuente perjuicio que ello supone. El ex ministro de educación **Ángel Gabilondo** resaltó recientemente en una entrevista la necesidad de un pacto educativo real: «no solo es el mejor camino, sino que es el único camino». Siguiendo en la línea del ex ministro Gabilondo, pienso que nos encontramos ante un tema en el que es necesario que la clase política tenga una altura de miras suficiente que le permita priorizar el interés del alumnado sobre el suyo propio. Pero además, creo que es necesario que la educación vuelva a estar en primer plano, que vuelva a ser uno de los temas protagonistas a la hora de realizar cualquier negociación. Como sociedad, es nuestro deber no permitir el desprestigio que está sufriendo día a día la educación pública y si para ello es necesaria una huelga general educativa, debemos ser los primeros en salir a la calle.